

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Rancagua  
CAUSA ROL : C-20566-2016  
CARATULADO : SOCIEDAD AGRÍCOLA EL TRANQUE DE  
ANGOSTURA LIMITADA/SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE  
SALUD

**Rancagua, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.**

**Vistos:**

.- Demanda.- Con fecha 14 de octubre de 2016, don Francisco de la Vega Giglio, en representación de Sociedad Agrícola El Tranque de Angostura Ltda. (SAETA), ambos domiciliados para estos efectos en Avenida El Parque 027, Villa San Joaquín, Rancagua, deduce reclamación judicial conforme al artículo 171 del Código Sanitario y 54 de la Ley N° 19.880, contra la Resolución N° 7688/2016 dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud del General Libertador Bernardo O'Higgins (SEREMI de Salud), representada por don Eduardo Peñaloza Acevedo, ambos con domicilio en Campos 423 – oficina 402, Rancagua.

Expone que durante visita inspectiva de fecha 07 de mayo de 2015 efectuada por la SEREMI de Salud, se imputaron una serie de hechos en contra de SAETA, respecto de los cuales se formularon una serie de cargos que iniciaron un sumario sanitario, y sin perjuicio de los cargos formulados en Acta de Inspección N° 32.381, la SEREMI de Salud remitió Ordinario N° 1076/2015 Informe de Fiscalización, señalando expresamente que los mismos hechos corresponderían a transgresiones de las respectivas resoluciones de calificación ambiental (RCA N° 23/2006), con el objeto de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tomara conocimiento de las eventuales infracciones, e iniciara los procedimientos correspondientes.

Señala que presentó oportunamente descargos, dictándose con fecha 03 de diciembre de 2015 por la SEREMI su Resolución 17816 condenando a su representada al pago de una multa de 200 UTM, apercibiéndola a presentar un plan de manejo de residuos peligrosos y subsanar “las demás deficiencias constatadas en el acta de inspección”, dentro de un plazo de 15 días contados desde su notificación, sin considerar y ni siquiera mencionar los argumentos planteados por SAETA en su defensa. Presentado recurso de reposición, solicitando se le absolviera de los cargos, o en subsidio se aplicaran los apercibimientos y amonestaciones del artículo 171 del Código Sanitario, o en subsidio se aplicaran circunstancias atenuantes, la SEREMI rechazó la



reposición en su Resolución 7688, misma que sostiene adolece de graves vicios de legalidad, que motivan la presente reclamación, en que solicita revocar las Resoluciones N° 17816 y 7688, absolviendo a su representada de las imputaciones efectuadas en su contra por la SEREMI de Salud.

En cuanto a las Resoluciones N° 17816 y N° 7688, alega los siguientes vicios de legalidad:

1.- Vulneración al principio de motivación: las resoluciones han omitido requisitos obligatorios de su contenido, en particular, la exposición clara, lógica y completa de los hechos que dan base para la sustentación de la resolución. La autoridad no puede actuar arbitrariamente, es decir, sin motivación de sus actos, manifestándose la Contraloría General de la República que el deber de motivación de los actos administrativos, es requisito de existencia del principio de juridicidad (cita Dictámenes N° 42268 de 18/08/2004; N° 37.496 de 11/08/2005; N° 46.223 de 29/09/2006; N° 12360 de 20/03/2007; N° 17701 de 17/04/2008; N° 44114 de 21/09/2005; N° 2783 de 17/01/2007; 23114 de 24/05/2007 y N° 55132 de 31/08/2011)

En relación a los cargos imputados en Acta de Inspección y la condena que efectúa la Resolución N° 17816, confirmada por Resolución N° 7688, se ha infringido el principio de motivación, por cuanto:

- a) Los cargos no señalan las normas que supuestamente habrían sido infringidas, reiterando que para el adecuado ejercicio del derecho a defensa, quien es objeto de un cargo infraccional en un proceso sancionatorio, debe conocer los fundamentos de todos los aspectos relevantes de la imputación, así como de aquellos que sustentan una sanción impuesta.
- b) La Resolución N° 17816 no argumenta de qué manera los descargos no logran rebatir los cargos formulados, y a su vez, la Resolución 7688 no expuso nada en relación a los argumentos señalados por su parte en recurso de reposición, ni por qué no debían ser considerados para absolver a su representada, o bien, atenuar su responsabilidad.

2.- Vulneración del principio non bis in ídem: señala que la SMA al recibir el informe de Fiscalización de la SEREMI de Salud por medio del ORD. N° 1076/2015, incluyó los hechos de dicho informe en su reformulación de cargos en contra de su representada, de manera que los hechos imputados en el sumario sanitario y que sustentarían la condena impuesta a su representada, son también objeto de un procedimiento sancionatorio por parte de la SMA, infringiendo gravemente la Administración del Estado el principio señalado. Precisa que la doctrina dice que este principio opera con sólo pretender juzgar



a una persona dos veces, protege el mero hecho de concurrir a un juicio por un mismo hecho que se ventila en otra instancia.

3.- Vulneración del principio de imparcialidad: acusa que el actuar de los funcionarios de la SEREMI de Salud en su fiscalización a SAETA en el mes de mayo de 2015, careció de la objetividad requerida por las normas legales que rigen el actuar de los funcionarios públicos, infringiéndose el principio de imparcialidad del artículo 13 de la Ley N° 19.880. Agrega que confirma la subjetividad de las apreciaciones de la SEREMI de Salud al contrastar sus observaciones con el contenido de la Hoja de Visita N° 10413 emitida por el SAG de O'Higgins, cuyos funcionarios participaron en conjunto con la SEREMI de Salud el día 07 de mayo, en particular respecto de las condiciones de la laguna, en que el SAG no indicó de ninguna manera que la laguna se encontraba ocupando el margen de seguridad de 4000 m<sup>3</sup>, y por el contrario, la SEREMI de Salud afirma en sus cargos que la laguna se encontraba “en su capacidad de almacenamiento al límite, generando peligros de derrames en caso de lluvias”. Si el SAG – organismo competente en la protección del recurso suelo – no señaló el peligro de derrames de la laguna en su Hoja de Visita, es porque la condición de la laguna ese día no ameritaba ningún peligro que observar.

4.- Vulneración al principio de tipicidad y derecho a la debida defensa: plantea que siendo el derecho sancionatorio una manifestación del *ius Puniendi* estatal, conforme a lo expresado reiteradamente por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República (cita Dictámenes N° 14571/2005, N° 28226/2007, N°34407/2008 y N° 32755/2009), la determinación de la responsabilidad administrativa por parte de las autoridades se encuentra ligada a la aplicación de penas contra las personas y, por tanto, rige a su respecto el principio de tipicidad, es decir, el hecho imputado debe constar específica y detalladamente como una infracción normativa. Si no se imputa una norma infringida, no existe responsabilidad, y por tanto, el procedimiento sancionatorio carece de objeto. Los cargos formulados en términos vagos, genéricos o imprecisos, y con mayor razón los que no señalen la norma infringida, no permiten cumplir con los requisitos de validez necesarios, y en este caso, al no imputarse infracciones a normas en el Acta de Inspección a SAETA, no se configura responsabilidad por los hechos que describe dicho documento, debiendo absolverse a SAETA por dichos cargos. Agrega que el derecho a defensa está íntimamente ligado al de tipicidad, pues al haber omitido la SEREMI de Salud identificar en el Acta de Inspección las normas que se



imputarían como infringidas, se afectó claramente el derecho a la debida defensa de SAETA, al impedir conocer la naturaleza o características de las infracciones que se le imputaron (Dictámenes N° 12798/2007, N° 38051/2006, N° 26917/2006, N° 26917/2006, N° 63086/2004, N° 34503/2004, N° 38508/2003 y N° 24285/1998) y con ello, desarrollar adecuadamente los descargos, derecho que se encuentra consagrado además en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los aspectos de fondo del sumario sanitario, señala que sin perjuicio de que en sus descargos y reposición su representada planteó la vulneración al principio de tipicidad y derecho a la debida defensa, también contestó en cada cargo temas de fondo, lo que no fue observado por las Resoluciones N° 17816 y N° 7688, reiterando en la presente reclamación sus alegaciones en relación a cada uno de los hechos contenidos en el Acta de Fiscalización, manifestando a modo de conclusión que la SEREMI de Salud careció de elementos objetivos de prueba en relación a ellos, formulándolos sobre apreciaciones subjetivas, e incurriendo en abierta infracción al deber mínimo de tipicidad y debida defensa. Además, no consideró los argumentos expuestos por su representada en su escrito de descargos y de reposición, ni por la Resolución 17816 ni la 7688, infringiendo ambas el requisito de motivación mínimo para validez de todo acto jurídico.

Por lo expuesto, solicita en definitiva que las resoluciones N° 7688/2016 y N° 17816/2015 sean dejadas sin efecto resolviendo finalmente absolver a SAETA; sin perjuicio de lo anterior, y en el improbable caso que se decida no absolver a la empresa, solicita la rebaja prudencial de la multa, en atención a los argumentos de hecho y de derecho que se expusieron.

.- Notificación.- Con fecha 09 de noviembre de 2016, se notifica personalmente la demanda al SEREMI de Salud, don Eduardo Peñaloza Acevedo.

.- Comparendo.- Con fecha 15 de noviembre de 2016, se celebra la audiencia de estilo con asistencia del apoderado de la reclamante y en rebeldía de la parte demandada.

.- Incidente de nulidad.- Por escrito de fecha 17 de noviembre de 2016, comparece el Secretario Regional Ministerial de Salud en representación de la reclamada e incidente de corrección del procedimiento, alegando la nulidad de lo obrado por falta de un presupuesto procesal de existencia, por cuanto la SEREMI de Salud no tiene personalidad jurídica propia y aquello impide que sea emplazada en juicio, porque no tiene capacidad procesal.



.- Nulidad.- Previo allanamiento de la parte reclamante y rectificación de la demanda, individualizando como sujeto pasivo de la misma al Fisco de Chile, con fecha 28 de noviembre de 2016 se declara la nulidad de la notificación y del comparendo celebrado, ordenando notificar personalmente la demanda y su rectificación al demandado Fisco de Chile.

.- Notificación.- Con fecha 30 de noviembre de 2016, se notifica personalmente la demanda al Abogado Procurador Fiscal de Rancagua.

.- Comparendo.- Con fecha 06 de diciembre de 2016, se celebra audiencia de estilo con asistencia de los apoderados de ambas partes. El apoderado de la demandante ratifica su reclamación y solicita se dé lugar a ella, con costas; y por su parte, el apoderado de la demandada presenta minuta escrita que se agrega a la carpeta digital, oponiendo en lo principal excepción de caducidad de la acción, procediendo en el primer otrosí a contestar la demanda en subsidio. Seguidamente, el apoderado de la reclamante evacúa en audiencia el traslado conferido a la excepción de caducidad, quedando su resolución para definitiva. Llamadas las partes a conciliación, no se produjo.

.- Interlocutoria de prueba.- Con fecha 19 de diciembre de 2016, se dicta resolución que recibe la causa a prueba.

.- Citación a oír sentencia.- Con fecha 13 de julio de 2017, se cita a las partes a oír sentencia.

**Considerando:**

**A.- En cuanto a las tachas.**

**Primero:** Que, en el marco de la audiencia testimonial rendida por la parte demandada con fecha 02 de marzo de 2017, el apoderado del Fisco formula tacha en contra del testigo Jean Paul Labadie Fuchs, conforme a lo dispuesto en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, porque de la declaración del testigo se desprende que es trabajador dependiente de la persona que exige su testimonio, pues ha señalado que es Gerente de un holding que integran cuatro empresas, una de las cuales es la demandante Sociedad Agrícola El Tranque Ltda.; y posteriormente, formula tacha contra el testigo Braulio Antonio Cádiz Ríos, por idéntica causal, pues de su declaración se desprende que es trabajador dependiente de la persona que exige su testimonio, esto es, don Alejandro Fortín, quien es socio de la sociedad demandante.

**Segundo:** Que, evacuando los traslados conferidos, el apoderado de la demandada argumenta que si bien el testigo Sr. Labadie Fuchs tiene un



vínculo laboral con su representada, su cargo es de carácter gerencial, de manera que sus declaraciones no ponen en riesgo el vínculo laboral con la empresa, y por lo demás al ser Gerente tiene características de administrador general de su representada, siendo su testimonio fundamental para esclarecer los hechos del litigio, ya que junto a otra persona son los únicos que pudieron presenciar el actuar de los fiscalizadores el día 07 de mayo de 2015, acompañándolos en la fiscalización, por lo que es el único que puede declarar sobre la veracidad de los hechos señalados en el Acta de fiscalización; y en cuanto al testigo Sr. Cádiz Ríos, plantea que si bien mantiene un vínculo laboral con su representada, su testimonio es fundamental para el esclarecimiento de los hechos pues junto a otra persona, son los únicos que pudieron presenciar el actuar de los fiscalizadores el día 07 de mayo de 2015, acompañándolos en la fiscalización, por lo que es el único que puede declarar sobre la veracidad de los hechos señalados en el Acta de fiscalización.

**Tercero:** Que, si bien pueden resultar atendibles los argumentos vertidos por la reclamante, en orden a que los deponentes que presenta serían los únicos que podrían declarar por haber acompañado a los fiscalizadores el día 07 de mayo de 2015, lo cierto es que las tachas se basan en presunciones recogidas por el legislador que se sustentan en principios de sentido común, pues es lógico pensar que quien presta servicios retribuidos bajo un vínculo de dependencia para quien lo presenta a declarar en estrados, verá afectada su imparcialidad no necesariamente por el temor de perder su fuente de trabajo – aspecto que se encuentra claramente morigerado por la protección que actualmente les otorga la legislación laboral- sino también, por consideraciones de lealtad hacia su empleador o por la inclinación natural a proteger o justificar lo que se hace al interior de la empresa de que se forma parte prestando servicios, máxime tratándose de quien ha manifestado ser el Gerente “a cargo de toda la gestión productiva de las empresas señaladas”; por lo demás, permitir su declaración importaría pretender desvirtuar las apreciaciones u observaciones que se acusa como “subjetivas” en que habrían incurrido los fiscalizadores, con las opiniones o el parecer personal – por tanto, igualmente subjetivo - de funcionarios del mismo establecimiento fiscalizado, respecto de quienes se ha reconocido la existencia del vínculo laboral dependiente que la causal esgrimida exige para configurar las tacha, razones todas que llevarán a que las mismas sean acogidas.

**B.- En cuanto a la excepción de caducidad.**



**Cuarto:** Que, la recurrente formula recurso de reclamación en contra de la Resolución N° 7688/2016 y que confirma la Resolución 17816/2015 dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud del General Libertador Bernardo O'Higgins (SEREMI de Salud), acusando que las mismas adolecen de vicios de legalidad por infringir el principio de motivación de los actos administrativos; principio de non bis in ídem; principio de imparcialidad; y el principio de tipicidad y derecho a la debida defensa. Sobre esta base, reclama que los hechos constitutivos de los cargos que le fueran imputados a su representada, responden a la apreciación subjetiva del fiscalizador y carecen de todo sustento objetivo, infringiéndose el deber mínimo de tipicidad al no señalar la transgresión normativa y/o la disposición sanitaria infringida, lo que impediría conocer la naturaleza o características de las infracciones que se le imputaron, afectándose con ello su derecho a la defensa; e igualmente, al no considerarse los argumentos y pruebas que su representada acompañara en sus escritos de descargos y de reposición, las resoluciones reclamadas infringirían el requisito de motivación mínimo para la validez de todo acto jurídico, razones todas por las que solicita sean dejadas sin efecto y se absuelva a la empresa, o en subsidio se rebaje prudencialmente la multa.

**Quinto:** Que, como cuestión previa a formular su contestación, la parte reclamada opone en lo principal de su minuta escrita la excepción de caducidad de la acción intentada, pues se ha reclamado de la Resolución Exenta N° 7688 de fecha 11 de agosto de 2016 y que fuera notificada el 04 de octubre de 2016, de modo que el plazo de cinco días hábiles que tenía la sociedad para reclamar de la sanción impuesta en la sentencia (art. 171 C. Sanitario) vencía el 11 de octubre de 2016 y no el 14 de octubre de 2016, fecha en que se presentó al tribunal el libelo con la demanda respectiva, resultando extemporánea y habiendo operado la caducidad de la acción.

**Sexto:** Que, evacuando en audiencia el traslado de la excepción planteada, la parte reclamante sostiene que su demanda fue presentada dentro de plazo, pues a su respecto rigen las normas de notificación de la Ley N° 19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos, por ser la resolución emitida por la Seremi de Salud un acto administrativo. En consecuencia, habiéndose recibido por la oficina de correos del domicilio de su representada con fecha 04 de octubre de 2016, el plazo comenzó a regir con fecha 10 de octubre de 2016, por lo que solicita el rechazo de la excepción de caducidad.

**Séptimo:** Que, de la prueba documental acompañada por las reclamada en su minuta escrita de contestación, no objetada de contrario, se constata que



la carta certificada a través de la cual se notificó la Resolución Exenta N° 7688/2016, que rechaza el recurso de reposición intentado y confirma la Resolución 17816/2015 dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud del General Libertador Bernardo O'Higgins (SEREMI de Salud), fue recibida en la oficina de Correos de Chile correspondiente al domicilio de la sumariada el 04 de octubre de 2016, siendo entregada ese mismo día en la dirección señalada en el marco del procedimiento administrativo de sumario sanitario, específicamente en los escritos de descargos y de reposición que obran en el expediente custodiado bajo el N° 896/2017, a saber, el ubicado en Avenida Nueva Tajamar N° 481 – Torre Norte – Oficina 1103 de la comuna de Las Condes, a través de doña Fabiola Sepúlveda.

**Octavo:** Que, como toda notificación, aquella practicada por carta certificada busca noticiar debidamente a su destinatario, del contenido de la resolución emitida por la autoridad competente, y precisamente porque la misma no se practica de manera personal o mediante cédula entregada en el domicilio del interesado por algún ministro de fe, el legislador ha venido en señalar la época o momento en que ha de entenderse notificada, fijando el artículo 46 inciso segundo de la Ley N° 19.880, el tercer día contado desde el ingreso de la misiva en la respectiva oficina de correos, consagrando así una presunción de conocimiento. En tal sentido, si bien el plazo que establece el artículo 171 del Código Sanitario dice relación con una acción jurisdiccional, por lo que su cómputo deberá hacerse como cualquier plazo judicial, en los términos del artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que la resolución recaída en el recurso de reposición intentado por la sumariada constituye el acto terminal del procedimiento administrativo y producirá sus efectos desde que haya sido debidamente notificada en los términos que consagra la Ley N° 19.880, luego, por más que la reclamante no haya discutido que la carta certificada fue entregada con fecha 04 de octubre de 2016, lo cierto es que la disposición contenida en el artículo 46 inciso segundo de la ley en comento, tiene carácter imperativo y fija precisamente la época en que la notificación se entiende practicada.

**Noveno:** Que, encontrándose en juego el debido respecto de una garantía esencial de todo procedimiento administrativo, como lo es el derecho que asiste al administrado de impugnar lo resuelto, cuestión que por lo demás constituye una de las bases del debido proceso, toda interpretación que se haga ha de ser restrictiva respecto de la Administración y amparar el ejercicio de la garantía de rango constitucional que asegura a todas las personas el





derecho de ser sometidas a un procedimiento racional y justo, lo que exige la debida certeza respecto de una cuestión tan esencial como es la fecha en que debe tenerse por notificada. En tal sentido, siguiendo la doctrina recogida por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 28.226 de 22 de junio de 2007, tratándose de normas de derecho público –como son las normas procesales contenidas en la Ley N° 19.880-, estas deberán ser entendidas de forma estricta cuando otorguen potestades a la Administración, de modo que “sólo se interpreten restrictivamente aquellas que se refieran a las atribuciones de los órganos del Estado, en tanto que las que se refieran a derechos, libertades o garantías de las personas, o limiten las potestades estatales, lo sean extensivamente, conforme a los principios que enuncia en la materia la Constitución Política de la República.”, luego, las normas relativas a la práctica de las notificaciones en el procedimiento administrativo (art. 45, 46 y 47 Ley N° 19.880) deben ser interpretadas restrictivamente en relación a la Administración y favoreciendo el ejercicio del derecho que asiste al administrado para recurrir a la sede judicial, por lo que cediendo en favor de la empresa sumariada la presunción contenida en el inciso segundo del artículo 46, el término de cinco días hábiles para interponer la acción de reclamación judicial necesariamente habrá de computarse desde el 07 de octubre de 2016 (tercer día siguiente a la recepción de la carta certificada en la oficina de Correos que corresponda) y descontando los feriados de los días 09 y 10 octubre de ese año, venciendo entonces el plazo para accionar el día 14 de octubre de 2016, por lo que cabe concluir que ha sido intentada oportunamente y desestimarse la alegación de caducidad esgrimida por la reclamada como excepción en lo principal, y reiterada luego como excepción de fondo en el primer otrosí de su minuta escrita.

**C.- En cuanto al fondo de la reclamación.**

**Décimo:** Que, al primer otrosí de su minuta escrita y evacuando el trámite de la contestación, luego de controvertir genéricamente los hechos vertidos por el actor en su reclamación y reiterar la alegación de caducidad como excepción de fondo, la apoderada del Fisco argumenta que las sentencias sanitarias no adolecen de vicios de legalidad pues son actos administrativos terminales que cumple con el principio de legalidad contenido en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, ya que fueron dictadas por la autoridad regularmente investida, competente, con presencia de motivos de hecho y de derecho, conteniendo legalidad del objeto, sin vicios de forma ni desviación de poder, por lo que si se pretende pedir la nulidad de



derecho público, el demandante debió pedirla en un juicio de lato conocimiento, no en éste de reclamo de multa cursada por la autoridad sanitaria.

Plantea que no es cierto que en el Derecho Administrativo sean aplicables todos los principios garantísticos del Derecho Penal (cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema), señalando que la imposibilidad jurídica de asimilar la contravención administrativa a la penal, se manifiesta a nivel legal en la imposibilidad de exigir a la Administración la aplicación de un principio de legalidad de las infracciones entendido del mismo modo que en la legislación punitiva, es decir, no se puede exigir que todas las infracciones administrativas se encuentren “tipificadas” de manera previa a la comisión del hecho, ya que la realidad fáctica de la regulación sanitaria deja en evidencia que las normas sanitarias no se encuentran todas contenidas y sistematizadas en el Código Sanitario, y porque además la regulación sanitaria presenta una gran dinámica, por lo que el principio de legalidad en materia administrativa se ve satisfecho con el establecimiento del estándar de cuidado o la norma técnica que deben observar y cumplir los administrados, y con la determinación de las sanciones que se le pueden aplicar en caso de incumplimiento.

En lo referente al principio de Tipicidad, sostiene que el sumario sanitario es un procedimiento administrativo sancionatorio especial. El artículo 156 del Código Sanitario señala que se levantará acta dejándose constancia de los hechos materia de la infracción. La jurisprudencia administrativa señala que los cargos deben referirse a la conducta específica y sobre la base de disposiciones determinadas (Dictamen 15.860-2015 C.G.R.), lo que significa que no debe consignarse la disposición infringida, toda vez que el fiscalizador tiene la calidad de ministro de fe y su actuación se limita a consignar en el acta de inspección hechos constitutivos de infracciones sanitarias, cuestión que en definitiva determina la autoridad al resolver el sumario mediante una decisión final.

Pasando luego a las infracciones constatadas, señala que la Sentencia N° 17816 y que fuera confirmada por la N° 7688, se ajusta enteramente a derecho y al mérito del sumario en que se han dictado. Las infracciones que la fundamentan fueron constatadas en fiscalización realizada por la autoridad sanitaria y de las cuales se dejó constancia en el Acta de Inspección N° 032381 de fecha 07 de mayo de 2015 (que transcribe), los que no resultaron desvirtuados totalmente con los descargos y antecedentes aportados por la reclamante, en la oportunidad pertinente del sumario sanitario, citando al efecto lo dispuesto en el artículo 166 del Código Sanitario. Las irregularidades de que



da cuenta el Acta constituyen infracciones previstas en los artículos de la normativa sanitaria que señala, destacando en particular lo consignado en el Informe Técnico Sumario Sanitario, de fecha 01 de junio de 2015, elaborado por el funcionario de la SEREMI de Salud de O'Higgins, don Víctor Peña, quien califica la infracción como grave y en nivel alto. Concluye que la cuantía de la multa aplicada se ubica dentro del rango previsto en el artículo 174 del Código Sanitario.

**Undécimo:** Que, como ha venido explicando la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (vg. Rol2157-2008, sentencia de fecha 15/10/2009; Rol N° 11.462-2013, sentencia de fecha 16/01/2014; Rol N° 30.779-2014, sentencia de fecha 11/06/2015), la potestad sancionadora de la Administración admite un origen común con el derecho penal en el ius puniendi del Estado, por lo que le resultan aplicables los mismos principios, límites y garantías que en la Carta Fundamental se prescriben para el derecho punitivo, aunque ese traspaso haya de producirse con ciertos matices en consideración a la particular naturaleza de las contravenciones administrativas.

Como expresión de la actividad administrativa estatal, la potestad sancionatoria debe primordialmente sujetarse al principio de legalidad, que obliga a todos los órganos del Estado a actuar con arreglo a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

En el campo particular del derecho sancionatorio el principio de la legalidad requiere que tanto las conductas reprochables como las sanciones con que se las castiga estén previamente determinadas en la ley. Este criterio rector encuentra su expresión más específica en otro principio que le sirve de complemento: el de la tipicidad, de acuerdo con el cual no resulta suficiente que la infracción se halle establecida en la ley, sino que a ello debe agregarse la exigencia de que esta describa expresamente la conducta que la configura, con lo que se resguarda la garantía de la seguridad jurídica, desde que la descripción del comportamiento indebido pone anticipadamente en conocimiento del destinatario cuál es el deber a que tiene que ceñirse en su actuar.

Sin embargo, la naturaleza de las contravenciones administrativas, en las que confluyen componentes técnicos, dinámicos y sujetos a variabilidad en el tiempo, hace imposible su síntesis descriptiva en un precepto general como lo es una ley, de modo que el principio de tipicidad al traspasarse al ámbito sancionatorio de la Administración admite ciertos grados de atenuación.



**Duodécimo:** Que, en armonía con lo anterior, la jurisprudencia ha entendido que la predeterminación de los comportamientos que configuran infracciones administrativas se satisface con la exigencia de que en la ley se describa el núcleo esencial de las conductas censurables, pudiendo éstas precisarse y complementarse en aspectos no sustanciales por normas emanadas de una autoridad distinta a la legislativa, como es el Ejecutivo, por vía de decretos y reglamentos, en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución que le compete.

**Décimo tercero:** Que, expresadas las anteriores consideraciones, cabe tener presente que el artículo 174 del Código Sanitario menciona las penas que pueden aplicarse a quienes incurran en conductas transgresoras a sus preceptos y a los reglamentos sanitarios.

En el caso que nos convoca, esta disposición debe relacionarse con lo establecido en el artículo 82 del Código Sanitario, que prescribe que el respectivo reglamento debe comprender normas que se refieran a "las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento, con el fin de proteger especialmente la vida, la salud y bienestar de los obreros y empleados y de la población en general"; así como con lo dispuesto en el artículo 89 de Código Sanitario, que señala que el reglamento comprenderá normas que se refieran a "la conservación y pureza del aire y evitar en él la presencia de materias u olores que constituyan una amenaza para la salud, seguridad o bienestar del hombre o que tengan influencia desfavorable sobre el uso y goce de los bienes".

Por su parte, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 144/61 MINSAL sobre Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquiera naturaleza, señala "Los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario".

A su turno, el Decreto Supremo N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud, en congruencia con el antes aludido artículo 82 del Código Sanitario, dispone: "La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella." (Artículo 3); señalando luego que "En aquellos lugares de trabajo donde



se almacenen, fabriquen o manipulen productos tóxicos o corrosivos, de cualquiera naturaleza, los pisos deberán ser de material resistente a éstos, impermeables y no porosos, de tal manera que faciliten una limpieza oportuna y completa”, agregando que “Para efectos del presente reglamento se entenderá por sustancias tóxicas, corrosivas, peligrosas, infecciosas, radiactivas, venenosas, explosivas o inflamables aquellas definidas en la Norma Oficial NCh 382. of 98” (Artículo 5); que “Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza” y que “Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario” (Artículo 11); que “La acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar con la autorización sanitaria” y que “se entenderá por residuo industrial todo aquél residuo sólido o líquido, o combinaciones de éstos, provenientes de los procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no puedan asimilarse a los residuos domésticos” (Artículo 18); que “Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas.” (Artículo 36). También añade que “deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores” (Artículo 37).

**Décimo cuarto:** Que, armonizando lo estatuido en las disposiciones de dichos Decretos Supremos, con lo establecido en los artículos 82 y 89 del Código Sanitario, es dable advertir que el núcleo esencial de las conductas sancionadas aparece descrito en el precepto legal, complementado luego por la normativa reglamentaria, por lo que cabe considerar suficientemente cumplido en la especie el requisito de tipicidad de la infracción administrativa por la que se sancionó a la empresa reclamante, la cual, entonces, no pudo sino tener conocimiento anticipado de las normas que le imponían la obligación de evitar la presencia en el aire de materias u olores que constituyan una amenaza, mediante su captación o eliminación en forma tal de no que causen peligros, daños o molestias al vecindario; así como la obligación de proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, procurando la existencia de pisos adecuados, adoptando medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, procediendo a la acumulación, tratamiento y disposición final de los residuos industriales con la pertinente autorización



sanitaria, y procurando mantener las instalaciones, herramientas y equipos en condiciones seguras y en buen funcionamiento, suprimiendo así cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de sus trabajadores.

**Décimo quinto:** Que, no cabe confundir entonces el principio de tipicidad, que debe cumplirse en la descripción normativa de las conductas sancionables en el ámbito administrativo, con la formulación misma de los cargos que en el marco del sumario sanitario constituyen los hechos constatados por el fiscalizador, pues como se ha dicho, quien desarrolla una actividad económica sujeto por lo demás a una Resolución de Calificación Ambiental, tal como surge de los diversos medios de pruebas aparejados en este juicio, tiene conocimiento anticipado de las normas ambientales y sanitarias a que se encuentra sometido para precaver los eventuales peligros o daños que dicha actividad conlleva para la población en general como para sus trabajadores, por lo que la circunstancia de no indicarse en el Acta de Fiscalización de manera específica la normativa presuntamente infringida, no ha podido por sí sola afectar el ejercicio de su derecho a la legítima defensa, pues de sus propios descargos y alegaciones formuladas en relación a cada una de las observaciones formuladas con ocasión de la inspección sanitaria de fecha 07 de mayo de 2015, queda en evidencia que ha comprendido cabalmente los hechos que le fueron imputados y que según establece el Título I punto 3.- literal c) del Manual de Fiscalización Sanitaria, deben consignarse por la fiscalizadora en la forma como fueron percibidos por los sentidos o los medios instrumentales que permitan su percepción, con la respectiva denominación de la normativa sanitaria presuntamente infringida “si fuere posible”.

**Décimo sexto:** Que, pasando ahora a su alegación de infracción al principio de imparcialidad, lo cierto es que no se imputa a la funcionaria fiscalizadora el haberse negado a recibir los antecedentes con que haya podido contar la empresa sumariada para desvirtuar o explicar alguno de los hechos observados ni que haya incurrido en conductas específicas que sean contrarias a la probidad administrativa durante el acto de fiscalización, que es precisamente a lo que apunta – en relación a dicha funcionaria - este principio recogido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880. En sus escritos de reposición presentada en sede administrativa y ahora de reclamación en sede judicial, la falta de imparcialidad que acusa de la fiscalizadora se vincula directamente con el carácter subjetivo y por tanto no comprobable con elementos o antecedentes



objetivos, que atribuye a los hechos que la funcionaria plasmó en el Acta de fiscalización, luego, el cuestionamiento formulado apunta a desvirtuar el acta como antecedente bastante o suficiente para tener por comprobada la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios, de manera que será al analizar las imputaciones allí contenidas que se resolverá sobre ese punto; y lo mismo aplica para lo concerniente a la vulneración que se alega del principio de non bis in ídem, pues necesariamente habrá de analizarse si uno o más de los hechos materia de la sanción administrativa sanitaria, resultan idénticos a aquellos por lo que se habría solicitado instruir proceso sancionatorio a la Superintendencia del Medio Ambiente.

**Décimo séptimo:** Que, según consta en Acta de fiscalización N° 032381 y en sentencia dictada por la SEREMI de Salud (Resolución Exenta N° 17816 de fecha 03 de diciembre de 2015), rolantes en el Expediente Administrativo RUS N° 838-2015 - acompañado por la parte reclamada y que obra en Custodia N° 896/2017 -, la fiscalizadora señala como hechos constatados:

- 1.- “En pozo acumulación de purines sector Plantel reproductor, se encuentra con tapa de madera en mal estado, permitiendo la emanación de fuertes olores”.
- 2.- “Estanque metálico de acumulación de la fracción líquida, en sector plantel reproducción se encuentra abierto, no contando con recubrimiento, lo que genera emanaciones de olores”.
- 3.- “En sector Plantel de Recría, se observa en caseta donde se ubica equipo generador eléctrico, derrame de petróleo a piso, caseta no cuenta con piso con una adecuada impermeabilización para el manejo de hidrocarburos”.
- 4.- “No se acredita mediante registro, la declaración de emisiones del equipo generador de energía, además este, no reúne las condiciones de insonorización, de acuerdo a la normativa vigente”.
- 5.- “Pabellones de los Planteles de cerdo, no cuentan con condiciones de hermeticidad, dejando libre espacios que permiten emanaciones de olores y moscas desde el interior de estos”.
- 6.- “Presencia de moscas en pabellones de recría, dado que el sistema de piso es plástico ranurado, lo que permite que el purín se acumule en fosa del subsuelo generando olores y moscas”.
- 7.- “En sector de recría se encuentra con servicios higiénicos nuevos, dichas instalaciones sanitarias no acreditan autorización sanitaria, conforme lo establece la reglamentación (DS 594/99)”.



- 8.- “Sistema tratamiento wetland, se encuentra colapsado con purines, observándose que las aguas están sin movimientos, superficie con exceso de material orgánico, lodo en superficie, generando presencia de fuertes olores.
- 9.- “Pozo de impulsión de aguas del sistema Wetland, se encuentra abierto, sin recubrimiento superficial, permitiendo emanaciones de olores”.
- 10.- “Laguna anaeróbica, se encuentra colmatada y en su capacidad de almacenamiento al límite, generando peligro de derrames en caso de lluvias”.
- 11.- “Laguna anaeróbica, se observa con costra en superficie, exceso de material orgánico, presencia de lodos, lo que genera presencia de fuertes olores.”
- 12.- “No hay registro de retiro de lodos desde la laguna anaeróbica, permitiendo acumulación de lodo en todo el recinto.”
- 13.- “En potrero se observa acumulación de guano sólido, el que permanece desde el día anterior, lo que genera presencia de moscas y vectores.”
- 14.- “En sector engorda, se constata acumulación de residuos industriales no peligrosos, como: plástico, chatarra, sin orden, ni segregación, no contando con las debidas autorizaciones sanitarias sectoriales”.
- 15.- “Pozo de acumulación de purines ubicado en sector separador primario recría y engorda, se encuentra con tapas de madera en mal estado, permitiendo fuga de olores desde el interior.”
- 16.- “En sector separador tratamiento primario recría y engorda, se observa acopio de 3 bins, con cerdos muertos, los que han permanecido por 2 días, no contando con las medidas de higiene y sanitaria adecuada para el manejo de estos, lo que genera presencia de moscas y malos olores.”
- 17.- “Los envases de desinfectantes, no son tratados como residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en la normativa (DS 148/03)”.
- 18.- “De acuerdo a registros observados, de los meses de enero, febrero y marzo / 2015, los resultados de los muestreos efectuados en el efluente del sistema wetland, se encuentran superando los límites permitidos en el DS 90, Tabla 1, en los parámetros DBO5, SST, Nitrógeno Kendall, Fósforo Total, Aceites y Grasas”.
- 19.- “De acuerdo a registro observado, los resultados del monitoreo efectuado del efluente del sistema Wetland, presentan valores por sobre lo indicado en la NCh 1333, en los parámetros conductividad eléctrica y cloruros, en los meses de enero y marzo/2015”.

**Décimo octavo:** Que, con excepción de los cargos consignados en los numerales 7 y 17 del Acta de fiscalización, la reclamante plantea respecto de





todos los restantes que se han imputado supuestos hechos formulados con una clara apreciación subjetiva, que carecen de todo sustento objetivo y se limitan a ser una mera descripción, sin señalar la transgresión normativa imputada y/o la disposición sanitaria infringida; agregando respecto de todos los cargos que la SEREMI de Salud no consideró los argumentos expuestos por su representada en sus escritos de descargo y reposición, ni por la Resolución 17816 ni la 7688, para absolver o atenuar la sanción que aplica a SAETA, infringiendo ambas el requisito de motivación mínimo para la validez de todo acto jurídico.

Asimismo, en relación a cada uno de los hechos consignados en el Acta de fiscalización, la sumariada y ahora reclamante formuló las siguientes alegaciones:

**.- Observación N° 1:** “En pozo acumulación de purines sector Plantel reproductor, se encuentra con tapa de madera en mal estado, permitiendo la emanación de fuertes olores”: Señala que las tapas de madera cubrían todo el foso. Asimismo, los olores percibidos al momento de la visita son propios de la planta y del material con que se trabaja, sin que exista una distinción particular respecto a los olores imputados en este cargo de los comunes a la planta, pues además se trabaja con material fresco que no alcanza a descomponerse. Lo anterior se expuso en el descargo y reposición para que se absolviera a la empresa, sin embargo, la SEREMI de Salud no señaló nada en este punto. Agrega que también se expresó que la tapa de madera del pozo de acumulación de purines del sector Plantel Reproductor fue cambiada por una tapa de metal, que se acreditó con documental fotográfica en los descargos presentados, pero nada señaló la autoridad, para absolver o atenuar la sanción que aplica a SAETA en relación a este cargo.

**.- Observación N° 2:** “Estanque metálico de acumulación de la fracción líquida, en sector plantel reproducción se encuentra abierto, no contando con recubrimiento, lo que genera emanaciones de olores”: Señala que tanto en el descargo y la reposición se expuso que el estanque de acumulación de fracción líquida del Plantel de Reproducción fue cubierto con una lona, lo que se acreditó con documental fotográfica en los descargos, pero nada señaló la autoridad, para absolver o atenuar la sanción que aplica a SAETA en relación a este cargo.

**.- Observación N° 3:** “En sector Plantel de Recría, se observa en caseta donde se ubica equipo generador eléctrico, derrame de petróleo a piso, caseta no cuenta con piso con una adecuada impermeabilización para el manejo de



hidrocarburos”: Señala que tanto en el descargo y reposición se expuso que, para mejorar aún más la impermeabilización existente, se pintó el radier de concreto con pintura epóxica, se extendió la caseta hacia adelante para mejorar la recepción de tambores de petróleo y otorgar mayor comodidad para mantenciones, lo que se acreditó con documental fotográfica en los descargos presentados, pero nada señaló la autoridad, para absolver o atenuar la sanción que aplica a SAETA en relación a este cargo.

**.- Observación N° 4.-** “No se acredita mediante registro, la declaración de emisiones del equipo generador de energía, además este, no reúne las condiciones de insonorización, de acuerdo a la normativa vigente”: Respecto a la eventual obligación de declaraciones para el equipo electrógeno, sostiene que ésta no era exigible, pues se ha establecido por parte de la SEREMI de Salud Metropolitana, en el Título “Declaración de Emisiones y número de Registro de Proceso” del procedimiento establecido para las “Exigencias de Medición de Material Particulado para Grupos Electrógenos”, que “Los grupos electrógenos grupales cuya capacidad nominal de generación eléctrica es inferior a 20 KW como potencia activa, para cualquier combustible, no requerirán ser declarados ni contar con el número de registro SESMA, a menos que este servicio lo estimare necesario”. De esta manera, no existiendo norma particular para la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, cumpliendo el equipo electrógeno de SAETA con las condiciones precedentemente citadas, la obligación de declarar emisiones no es exigible a su respecto, conforme a una aplicación analógica de dicho criterio. Asimismo, señala que el Decreto Supremo N° 15/2013 MINSAL, Plan de Descontaminación Atmosférica para el valle central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (Plan de Descontaminación), no estableció la obligación de declarar emisiones para los grupos electrógenos, remitiéndose a establecer como obligación para estos que “Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente (art. 27). Por lo anterior, el Plan de Descontaminación tampoco establece expresamente una obligación específica de declarar emisiones a los equipos electrógenos.

**.- Observación N° 5:** “Pabellones de los Planteles de cerdo, no cuentan con condiciones de hermeticidad, dejando libre espacios que permiten



emanaciones de olores y moscas desde el interior de estos”: Señala que los pabellones están diseñados para permitir la ventilación, ya que los cerdos necesitan renovar el aire y poder controlar la temperatura dentro de las salas, dependiendo de la edad y tamaño de los cerdos. Si no se abrieran las ventanas o cortinas, se produciría un daño letal a los animales debido a la falta de oxígeno, ya que se calefacciona con pantallas de gas, y se generaría un exceso de acumulación de gases. En el descargo y reposición se expuso que se reemplazó cortinas en los pabellones de cerdos mejorando las condiciones de hermeticidad, lo que se acreditó con documental fotográfica en los descargos presentados, pero nada señaló la autoridad, para absolver o atenuar la sanción que aplica a SAETA en relación a este cargo. Asimismo, según dan cuenta los Certificados emitidos por GLS Sanidad Ambiental, acompañados en el primer otrosí de los descargos, por los meses de diciembre de 2014, enero, febrero, marzo y abril de 2015, la empresa ha procurado en forma consistente el control de vectores en el plantel.

**.- Observación N° 6:** “Presencia de moscas en pabellones de recría, dado que el sistema de piso es plástico ranurado, lo que permite que el purín se acumule en fosa del subsuelo generando olores y moscas”: Expone que el sistema de piso ranurado con foso de acumulación permite que se pueda acumular el purín durante toda la estadía de los animales en la sección de recría, lo que permite ahorrar en forma significativa la cantidad de agua a producir. Esto lleva a que disminuya la cantidad de riles a tratar y la cantidad de agua residual que haya que liberar al medio ambiente ya sea por riego u otra alternativa (biodigestión). Además este sistema permite criar los animales mucho más sanos, ya que no tiene contacto con fecas y orina, lo que lleva a menor uso de antibióticos y quimioterápicos, reduciendo el riesgo de generar agentes resistentes. Reitera que la empresa ha procurado en forma consistente el control de los vectores en el plantel.

**.- Observación N° 7:** “En sector de recría se encuentra con servicios higiénicos nuevos, dichas instalaciones sanitarias no acreditan autorización sanitaria, conforme lo establece la reglamentación (DS 594/99)”: Señala que en los descargos se acompañó copia de la Resolución Exenta N° 2184 de abril de 2014 de la SEREMI de Salud e O’Higgins, por medio de la cual fue aprobado el “proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Particular para Sector Recría (...) de propiedad de Sociedad Agrícola El Tranque de Angostura”. Sin embargo, la SEREMI de Salud no consideró los argumentos expuestos por su representada en escrito de descargos y reposición en relación a este cargo, ni por la



Resolución 17816 ni la 7688, infringiendo ambas el requisito de motivación mínimo para la validez de todo acto jurídico.

**.- Observación N° 8:** “Sistema tratamiento wetland, se encuentra colapsado con purines, observándose que las aguas están sin movimientos, superficie con exceso de material orgánico, lodo en superficie, generando presencia de fuertes olores. // Se observa que el líquido se encuentra al límite máximo, no existiendo margen de seguridad de almacenamiento, en caso de lluvias, lo que provocaría derrames al suelo”: Señala que tanto en el descargo y reposición se expuso que el Wetland se encontraba bajo el nivel de colapso, con movimiento y sin exceso de material orgánico, lo que se acreditó con documental fotográfica en los descargos presentados.

**.- Observación N° 9:** “Pozo de impulsión de aguas del sistema Wetland, se encuentra abierto, sin recubrimiento superficial, permitiendo emanaciones de olores”: Señala que tanto en el descargo y reposición se expuso que el recubrimiento superficial del pozo de impulsión de aguas del sistema wetland no tiene sustento alguno. El pozo se encuentra al final del wetland y a pocos metros de la laguna anaeróbica, ambos sistemas de mayor magnitud y que se encuentran abiertos.

**.- Observación N° 10:** “Laguna anaeróbica, se encuentra colmatada y en su capacidad de almacenamiento al límite, generando peligro de derrames en caso de lluvias”: Señala que tanto en el descargo y reposición se expuso que la laguna anaeróbica se encuentra bajo el límite de almacenamiento, fuera de peligro de derrame, lo que se acreditó con documental fotográfica en los descargos y reposición (fotografía recurso de reposición tomada el 29 de enero de 2016).

**.- Observación N° 11:** “Laguna anaeróbica, se observa con costra en superficie, exceso de material orgánico, presencia de lodos, lo que genera presencia de fuertes olores”: Señala que tanto en el descargo y reposición se expuso que la laguna anaeróbica se encuentra sin costra en superficie, lo que se acreditó con documental fotográfica en los descargos y reposición presentados (fotografía tomada el 29 de enero de 2016).

**.- Observación N° 12:** “No hay registro de retiro de lodos desde la laguna anaeróbica, permitiendo acumulación de lodo en todo el recinto”: Señala que tanto en el descargo y reposición se expuso que no hay acumulación de lodos en la laguna anaeróbica, lo que se acreditó con documental fotográfica en los descargos y reposición presentados (fotografía tomada el 29 de enero de 2016).



**.- Observación N° 13:** “En potrero se observa acumulación de guano sólido, el que permanece desde el día anterior, lo que genera presencia de moscas y vectores”: Señala que no es posible generar presencia de moscas por acumulación de materia orgánica en un solo día, pues el ciclo de la mosca requiere a lo menos y en condiciones óptimas de temperatura y humedad, 5 días desde que las moscas depositan sus huevos y hasta que sale una mosca adulta. En el momento de la visita no se observan moscas adultas que estuvieran poniendo huevos y menos formas larvarias, agregando que según dan cuenta los Certificados emitidos por GLS Sanidad Ambiental, acompañados al primer otrosí de los descargos, por los meses de diciembre de 2014, enero, febrero, marzo y abril de 2015, la empresa ha procurado en forma consistente el control de vectores en el plantel; asimismo, el transporte e incorporación de guano de fase separación primaria de sólidos dentro del predio se encuentra debidamente registrado, y a modo de ejemplo, se acompañaron los registros correspondientes a los meses de diciembre de 2014 a marzo de 2015 en los descargos.

**.- Observación N° 14:** “En sector engorda, se constata acumulación de residuos industriales no peligrosos, como: plástico, chatarra, sin orden, ni segregación, no contando con las debidas autorizaciones sanitarias sectoriales”: Señala que el Plantel de Cerdos de SAETA se encuentra en un proceso de reparación y modificación de acuerdo al “Plan de Saneamiento Predial para la Erradicación de PRRS”, aprobado por el SAG Región de O'Higgins mediante Resolución Exenta N° 58/2015, explicando que esto genera algunos residuos, entre otros: cortinas, líneas de alimentación, escombros, los cuales se están acumulando en un lugar en cada sector para ser retirados al final de proceso. Sin perjuicio de lo anterior, tanto en el descargo y la reposición se expuso que se efectuó la limpieza, orden y segregación de residuos industriales no peligrosos sector engorda, lo que se acreditó con documental fotográfica en los descargos presentados.

**.- Observación N° 15:** “Pozo de acumulación de purines ubicado en sector separador primario recría y engorda, se encuentra con tapas de madera en mal estado, permitiendo fuga de olores desde el interior”: Señala que en los descargos se expuso que los olores percibidos al momento de la visita son propios de la planta y del material con que se está trabajando. Agrega que aun cuando se podría considerar, por parte del fiscalizador, que la situación de las tapas permite la fuga de olores, lo importante es que en los hechos la emisión de estos es muy baja, no es distinta a la propia planta, por lo que no



correspondió que se formulara un cargo por este hecho. Tanto en el descargo y reposición se expuso que la tapa de madera del pozo de acumulación sector separador primario, sector recría y sector engorda fue reemplazada por una tapa de metal, lo que se acreditó con prueba documental fotográfica.

**.- Observación N° 16:** “En sector separador tratamiento primario recría y engorda, se observa acopio de 3 bins, con cerdos muertos, los que han permanecido por 2 días, no contando con las medidas de higiene y sanitaria adecuada para el manejo de estos, lo que genera presencia de moscas y malos olores”: Señala que en los descargos y reposición expuso que toda la mortalidad de los criaderos se recibe en bins especialmente dispuestos para estos (no permiten salida de líquidos percolados), agregando que de acuerdo a lo solicitado por el SAG, se debe dejar que los animales entren en proceso de descomposición para poder controlar el virus de PRRS y así evitar la diseminación de la enfermedad a otros planteles, cuando se muevan los cerdos a vertedero. Además, con esto se asegura que no haya robo de carne desde el vertedero. En el momento de la visita, se encontraban tres bins cubiertos con una lona que no permitía la entrada de moscas, ni de olores. Además evitaba que perros u otro animal, pudiera tener acceso a los animales muertos. Precisa que el retiro y traslado de las mortalidades es realizado por la empresa de “Transporte Río Negro Ltda.”, según facturas electrónicas acompañadas en descargos (diciembre 2014 a marzo 2015). Sin perjuicio de lo anterior, tanto en el descargo como en la reposición se expuso que se compró un contenedor refrigerado para acumulación de mortecinos por valor de \$5.450.000.-, acompañando factura en los descargos y se acreditó con prueba documental fotográfica.

**.- Observación N° 17:** “Los envases de desinfectantes, no son tratados como residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en la normativa (DS 148/03)”: Tanto en los descargos como en la reposición se señaló que la cantidad de residuos que genera SAETA es menor, siendo, en su mayoría residuos no peligrosos. Señala que en este sentido, la empresa cumple a cabalidad con lo dispuesto por las normas sanitarias pertinentes en relación al manejo de los residuos no peligrosos, pues: a) el retiro, transporte y sitio de eliminación de dichos residuos se efectúa con empresas autorizadas sanitariamente (art. 36 y 43 Reglamento de Residuos Peligrosos); b) los envases que contenían desinfectantes son reutilizados conforme a lo dispuesto por el inciso final del artículo 8° Reglamento de Residuos Peligrosos, es decir, son reutilizados sólo “(...) cuando no se trate de residuos incompatibles, a menos que hayan sido



previamente descontaminado.” La empresa despachó los envases desinfectantes a la empresa Coagra S.A., cuya planta se encuentra en la comuna de Rosario, según Guía de Despacho N° 27281 cuya copia acompañó en los descargos.

**.- Observación N° 18:** “De acuerdo a registros observados, de los meses de enero, febrero y marzo / 2015, los resultados de los muestreos efectuados en el efluente del sistema wetland, se encuentran superando los límites permitidos en el DS 90, Tabla 1, en los parámetros DBO5, SST, Nitrógeno Kendall, Fósforo Total, Aceites y Grasas”: Alega que tanto en el descargo y la reposición se expuso que se efectuó la aplicación de productos adquiridos a la empresa SolBío Chile, con un costo mensual aproximado de \$6.200.000.-, a fin de mejorar los índices en los parámetros del efluente Wetland, copia de cuyas facturas de los meses de enero, febrero, marzo y abril se acompañaron en los descargos.

**.- Observación N° 19:** “De acuerdo a registro observado, los resultados del monitoreo efectuado del efluente del sistema Wetland, presentan valores por sobre lo indicado en la NCh 1333, en los parámetros conductividad eléctrica y cloruros, en los meses de enero y marzo/2015”: Tanto en el descargo y la reposición se expuso que se efectuó la aplicación de productos adquiridos a la empresa SolBío Chile, con un costo mensual aproximado de \$6.200.000.-, a fin de mejorar los índices en los parámetros del efluente Wetland, copia de cuyas facturas de los meses de enero, febrero, marzo y abril se acompañaron en los descargos. Además, de acuerdo a lo señalado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental mediante Resolución Exenta N° 636/2014, “(...) la NCh N° 1.333/78 (sobre Plantel de Cerdos de SAETA) implica entender que el parámetro ‘coliformes fecales’, contemplado en el punto 6.2 de la citada NCh, no resulta exigible al efluente wetland que se destina al riego de maíz, salvo como un valor meramente referencial”.

**Décimo noveno:** Que, de conformidad a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud, contenidas en el “Manual de Fiscalización Sanitaria” aprobado por Resolución Exenta N° 216 de fecha 13 de abril de 2012, mismo que según sus motivaciones fue dictado con el objetivo de estandarizar los actos que en la fiscalización sanitaria efectúan las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en su rol de autoridad sanitaria y a la vez resguardar el derecho de los usuarios al debido proceso administrativo, en el acta de inspección deberá dejarse constancia de: “c) Hechos que constituyen la eventual infracción a la normativa sanitaria presuntamente infringida y alusión a



ésta, con su respectiva denominación si fuere posible. El acta evitará cualquier juicio de valor sobre los hechos, además de toda apreciación subjetiva de las circunstancias que rodean los hechos, los cuales serán señalados en la forma como fueron percibidos por los sentidos o los medios instrumentales que permitan su percepción.”

Por su parte, y en relación al principio de motivación mínimo de todo acto administrativo, habrá de tenerse en consideración las siguientes disposiciones de la Ley N° 19.880, aplicable supletoriamente al procedimiento de sumario sanitario regulado en el Código Sanitario:

a) Artículo 11.- Principio de imparcialidad. “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

b) Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: “f) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución;”

c) Artículo 41. Contenido de la resolución final. “La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados”, precisando en su inciso cuarto que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

Finalmente, el “Manual de Fiscalización Sanitaria” recoge también el principio de motivación o fundamentación de la resolución final que se dicta en el sumario sanitario, señalando que las pruebas agregadas al expediente deben ser ponderadas por la autoridad sanitaria “examinando los hechos presuntivos de infracción y concordándolos con los argumentos y medios probatorios acompañados, con miras a efectuar un análisis de todos ellos manteniendo un conocimiento exacto y reflexivo de cada uno de ellos, dentro de los principios generales del Derecho y aplicando, además, la lógica y la equidad”, agregando luego que “Lo anterior no significa que la autoridad sanitaria tenga la absoluta libertad para determinar el valor de convicción que le suministran las pruebas, ya que es indispensable que exponga las razones





sobre las cuales basa o funda su credibilidad, y que ellas estén constituidas por las reglas de la experiencia y de la materia específica tratada, lo que se traducirá en la necesidad que la resolución dictada sea fundada.”

**Vigésimo:** Que, junto al expediente sumarial aportado por la parte reclamada, durante el proceso se aparejó la documental y testimonial que a continuación se analiza:

A.- Documental reclamante.

1.- Copia de Resolución N° 7688/2016 emitida por la SEREMI de Salud Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. En sus considerandos se alude al recurso de reposición intentado por la empresa sumariada, el que se dice analizado en relación al contenido del sumario sanitario y la normativa sanitaria aplicable, indicándose que en informe emanado del Departamento de Acción Sanitaria, es posible concluir que el riesgo sanitario ha disminuido solo parcialmente y que las deficiencias sanitarias fueron constatadas en tiempo y forma en su oportunidad, resolviéndose el rechazo del recurso de reposición y mantener a firme la sanción impuesta de multa de 200 UTM.

2.- Copia de Resolución Exenta N° 58/2015 SAG Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, que aprueba el Plan de Saneamiento predial por la enfermedad denominada síndrome disgenésico y respiratorio del cerdo (PRRS) en unidades productivas industrial y deroga resolución que indica. Al tenor de este instrumento, con fecha 05 de diciembre de 2013 se emitió por la Dirección Regional del SAG la Resolución Exenta N° 2448/2013 estableciendo la medida de cuarentena en predio, procediéndose por parte de las Empresas Sociedad Agroindustrial Angostura Ltda. y Sociedad Agrícola El Tranque de Angostura Ltda., a presentar con fecha 25 de mayo de 2014 un Plan de Saneamiento Predial para la Erradicación de Síndrome Disgenésico Y Respiratorio Porcino (PRRS), aplicado a los sectores RUP 06.10.0002 y RUP 06.1.10.003. Subsanas las observaciones formuladas por el Servicio, el Plan de Saneamiento Predial fue evaluado favorablemente y aprobado.

3.- Copia de Facturas Electrónicas emitidas por SolBio Chile: a) Factura N° 48 emitida con fecha 26/01/2015, por concepto de Tratamiento Biológico Pozos Purineros, Laguna, Wetland.- Enero 2015; b) Factura N° 66 emitida con fecha 26/02/2015, por concepto de Tratamiento Biológico Pozos Purineros, Laguna, Wetland.- Febrero 2015; c) Factura N° 79 emitida con fecha 19/03/2015, por concepto de Tratamiento Biológico Pozos Purineros, Laguna, Wetland.- Marzo 2015; d) Factura N° 95 emitida con fecha 09/04/2015, por concepto de Tratamiento Biológico Pozos Purineros, Laguna, Wetland.- Abril 2015



4.- Certificados Control de Vectores emitidos por GLS Sanidad Ambiental: a) Certificado N° 2808.- da cuenta de Tratamiento “Desinfectado y Sanitizado” mediante aplicación de los productos FLYNEX 20 EC en la periferia del plantel y AGITA 10WG en exterior galpones y plantel procesos riles y tranque, así como Tratamiento “Desratizado” por aplicación del producto DETIA MINIBLOQUE en sector plantel de cerdos Engorda y Recría, los días 4, 11, 17, 24 diciembre de 2014, indicando como Diagnóstico “Muchos puntos de control pedidos. Baja actividad de roedores”; b) Certificado N° 2843.- da cuenta de Tratamiento “Desinfectado y Sanitizado” mediante aplicación de los productos FLYNEX 20 EC en la periferia del plantel y AGITA 10WG en exterior galpones y plantel procesos riles y tranque, así como Tratamiento “Desratizado” por aplicación del producto DETIA MINIBLOQUE en sector plantel de cerdos Engorda y Recría, los días 2, 09, 16, 23 y 30 enero de 2015, indicando como Diagnóstico “Alta actividad de roedores”; c) Certificado N° 2863.- da cuenta de Tratamiento “Desinfectado y Sanitizado” mediante aplicación de los productos FLYNEX 20 EC en la periferia del plantel y AGITA 10WG en exterior galpones y plantel procesos riles y tranque, así como Tratamiento “Desratizado” por aplicación del producto DETIA MINIBLOQUE en sector plantel de cerdos Engorda y Recría, los días 05, 12, 19 y 26 febrero de 2015, indicando como Diagnóstico “Regular actividad de roedores”; d) Certificado N° 2879.- da cuenta de Tratamiento “Desinfectado y Sanitizado” mediante aplicación de los productos FLYNEX 20 EC en la periferia del plantel y AGITA 10WG en exterior galpones y plantel procesos riles y tranque, así como Tratamiento “Desratizado” por aplicación del producto DETIA MINIBLOQUE en sector plantel de cerdos, los días 5, 12, 19 y 26 marzo de 2015, indicando como Diagnóstico “Menor actividad de roedores”; e) Certificado N° 2896.- da cuenta de Tratamiento “Desinfectado y Sanitizado” mediante aplicación de los productos FLYNEX 20 EC en la periferia del plantel y AGITA 10WG en exterior galpones y plantel procesos riles y tranque, así como Tratamiento “Desratizado” por aplicación del producto DETIA MINIBLOQUE en sector plantel de cerdos Engorda y Recría, los días 2, 09, 16, 23 y 30 abril de 2015, indicando como Diagnóstico “Regular actividad de roedores”.

5.- Copia de factura de contenedor refrigerado para acumulación de mortecinos por valor total \$5.450.200, emitida por Guillermo Celentano Contenedores Patagonia EIRL (Factura Electrónica N° 16757, emitida el 11 de mayo de 2015).



6.- Resolución Exenta 2184/2014 SEREMI de Salud Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, que aprueba Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Particular para SECTOR RECRÍA, ubicado en Parcela 14, Sector Fundo El Molino de la comuna de Mostazal, de propiedad de Sociedad Agrícola El Tranque Ltda.

El proyecto de agua potable particular aprobado contempla un volumen necesario de 0,9 m<sup>3</sup>/día para un total de seis personas, consistente en sistema de abastecimiento proveniente de noria, estanque de almacenamiento de 0,5 m<sup>3</sup> y sistema de desinfección; mientras que el proyecto de alcantarillado aprobado contempla un sistema de tratamiento consistente en fosa séptica prefabricada, con una capacidad de 3,0m<sup>3</sup>/día, para un total de seis personas y disposición final en zanja de drenaje.

7.- Copia Resolución N° 17.816/2015 emitida por la SEREMI de Salud Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

En la resolución que dicta la Sentencia en Sumario Sanitario RUS N° 838/2015, se consignan los 19 hechos constatados por funcionario del Departamento de Acción Sanitaria, en inspección realizada con fecha 07 de mayo de 2015, en el Fundo El Molino – Higuera N° 3, comuna de Mostazal, de propiedad de Sociedad Agrícola El Tranque de Angostura. Seguidamente, consigna que la sumariada efectuó presentación formulando descargos (sin desarrollarlos ni someramente), para luego señalar que “analizados los antecedentes del presente sumario sanitario, respecto a la normativa sanitaria infringida, de acuerdo al acta de fiscalización, se observan las siguientes inobservancias...”. Refiriéndose al principio de tipicidad, señala que éste no equivale a concluir que deba consignarse en el acta la disposición infringida y que el funcionario fiscalizador “en su actuación se limita a consignar en el acta de inspección hechos constitutivos de infracción sanitaria cuestión que en definitiva determina la autoridad al resolver el sumario mediante la decisión final”. Concluye que “los hechos señalados en el acta de inspección, importan infracción a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 144/61 del Ministerio de Salud, que establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquiera naturaleza; lo dispuesto en los artículos 3, 5, 11, 18, 36 y 37 del Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo; y lo dispuesto en el artículo 67 del Código Sanitario; lo anterior, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del mismo cuerpo legal”, aplicando finalmente una multa 200 UTM.



8.- Fotografías acompañadas en descargos de fecha 19 de mayo de 2015: a) reemplazo tapa metálica pozo plantel reproductor; b) cobertura con lona de estanque de acumulación fracción líquida plantel de reproducción; c) mejora de impermeabilización existente, pintado de radier de concreto con pintura epóxica, extensión de caseta hacia adelante para recepción de tambores de petróleo y comodidad para mantenciones del generador eléctrico existente en el sector Plantel de Recría; d) reemplazo de cortinas pabellones de cerdos, mejorando condiciones de hermeticidad; e) fotografía de Wetland, en la que puede observarse la existencia de un margen entre el nivel de las aguas y su límite máximo, impresionando que las mismas tienen movimiento; f) fotografía Laguna Anaeróbica, no se aprecia costra en superficie y tampoco impresiona con exceso de material orgánico y lodos; g) fotografías que dan cuenta de la acumulación en bins de diversos residuos industriales no peligrosos, los que parecen estar debidamente clasificados y separados; h) reemplazo de tapa metálica en pozo sector separador primario, sector Recría y sector Engorda; i) fotografía de contenedor refrigerado, que se habría adquirido para manejo de mortecinos.

9.- Copia de “Registros de Transporte e Incorporación de Guano en Fase Separación Primaria de Sólidos dentro del predio”, según el cual el retiro y posterior incorporación de guano se efectuaría de un día para otro, registrándose ininterrumpidamente como actividad realizada entre el día 01 de diciembre de 2014 y el 17 de marzo de 2015.

10.- Copia de facturas emitidas por empresa “Transporte Río Negro Ltda.”: a) Factura electrónica N° 5286, 31 de diciembre de 2014, flete traslado residuos Agrícola El Tranque – Santiago Poniente y flete traslado residuos Agrícola El Tranque – Chilemink; b) Factura electrónica N° 5393, 31 de enero de 2015, flete traslado residuos Agrícola El Tranque – Santiago Poniente y flete traslado residuos Agrícola El Tranque – Chilemink; c) Factura electrónica N° 5452, 29 de febrero de 2015, flete traslado residuos Agrícola El Tranque – Santiago Poniente y flete traslado residuos Agrícola El Tranque – Chilemink; d) Factura electrónica N° 5554, 31 de marzo de 2015, flete traslado residuos Agrícola El Tranque – Santiago Poniente y flete traslado residuos Agrícola El Tranque – Chilemink. Cabe señalar que Chilemink corresponde a la empresa hacia donde se trasladan las mortalidades, según consta en el Plan de Saneamiento aprobado por Resolución Exenta N° 58/2015 SAG.

11.- Copia de Guía de Despacho N° 027281 que da cuenta del envío o traslado hacia Planta Rosario de la empresa Coagra S.A., de bidón plástico 20 litros



(envases desinfectantes), acompañada en los descargos de fecha 19 de mayo de 2015.

12.- Copia de Resolución Exenta N° 636/2014 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 06 de agosto de 2014, conforme a la cual “el Titular no está sujeto al parámetro ‘coliformes fecales’ establecido en el D.S N° 90/2000, sino solo respecto de los parámetros no contemplados en la NCh 1333/78, tales como DBO5, aceites y grasas, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo, entre otros”, conforme a lo señalando en el motivo 5.7 de la resolución “esta Dirección Ejecutiva estima que la correcta interpretación de los Considerandos 3.1.2.3, 3.2.4 y 6 de la RCA N° 23/2006 en cuanto a la exigibilidad de la NCh N° 1333/78 implica entender que el parámetro ‘coliformes fecales’ establecido en el numeral 6.2 de la citada NCh, no resulta exigible al efluente Wetland que se destina al riego de maíz, salvo como un valor meramente referencial, siendo solo aplicable aquellos parámetros del D.S. N° 90/2000 que no se encuentren considerados en la NCh respecto de ese efluente”.

13.- Copia de actas de visitas realizadas por notario público don Guillermo Pérez Díaz: a) Certifica haberse constituido en Laguna Anaeróbica, con fecha 21 de julio de 2015, borde del lado surponiente, realizando medición con huincha entre el nivel actual de los purines contenidos en la laguna y el vértice de la misma, determinando una distancia de 153 centímetros; b) Certifica haberse constituido con fecha 28 de julio de 2015 en Laguna Anaeróbica, borde del lado surponiente, realizando medición con huincha entre el nivel actual de los purines contenidos en la laguna y el vértice de la misma, determinando una distancia de 152 centímetros; c) Certifica que con fecha 04 de agosto de 2015, se constituye en Laguna Anaeróbica, borde del lado surponiente, realizando medición con huincha entre el nivel actual de los purines contenidos en la laguna y el vértice de la misma, determinando una distancia de 145 centímetros, agregando que en el denominado “Wetland” o pantano artificial, fue posible constatar aguas libres de costras u otros materiales sólidos en la superficie.

14.- Copia de la Hoja de Visita N° 10413 emitida por el SAG, si bien se acompaña por la reclamante para acreditar que funcionarios de dicho Servicio también participaron de la visita del día 07 de mayo de 2015, sin reparar de manera alguna sobre el nivel de la laguna y posibles derrames al suelo, el instrumento en su copia digitalizada resulta absolutamente ininteligible.

15.- Fotografías del Wetland y de Laguna, captadas el 29 de enero de 2016.



16.- Copia ORD. N° 163 de 2017 del SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O'Higgins, don Eduardo Peñaloza Acevedo, en el que se informa que las funcionarias doña María Magdalena Iriondo Salaya y doña Susana Sánchez Valenzuela, no registran capacitaciones en materia de medición de olores.

17.- Copia ORD. N° 1076 de 2015 del SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O'Higgins, don Fernando Arenas Pino, mediante el cual se denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente lo observado en Acta de Inspección N° 32.381, en relación a los siguientes hechos:

a) laguna anaeróbica se encuentra colmatada con residuos líquidos, y en su capacidad de almacenamiento al límite, generando peligros de derrames que pueden afectar y contaminar el suelo, cursos de aguas superficiales y aguas subterráneas, en caso de lluvias;

b) se observa costra en la superficie de la laguna anaeróbica, lodos en exceso, lo que genera presencia de malos olores, señal de que el tratamiento no está siendo efectivo. Además, no existen registros de la extracción anual de los lodos comprometida en RCA;

c) sistema Wetland se encuentra colapsado con purines, observándose que las aguas se encuentran sin movimiento, se aprecia exceso de materia orgánica, lodos en superficie, lo que genera presencia de malos olores, transgrediendo lo indicado en la RCA N° 23 de 31 de enero de 2006;

d) en la inspección realizada al potrero donde se aplican los lodos, se observa acumulación de guano sólido, el que permanece desde el día anterior, lo que genera presencia de moscas y vectores;

e) de acuerdo a los registros entregados por el titular, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2015, los resultados de los muestreos efectuados en el efluente del sistema Wetland, se encuentran superando los límites permitidos en el D.S. N° 90, Tabla 1, en los parámetros de DBO5, SST, Nitrógeno Total Kjeldahl, Fósforo Total, Aceites y Grasas. También se observa superada la NCh 1333/78, respecto los parámetros de Conductividad Específica y Cloruros en los meses de Enero y Marzo de 2015, transgrediendo lo establecido en el RCA.

18.- Copia de Acta N° 37259 de 2016 SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O'Higgins, en la que el funcionario don Esteban Contreras Betancourt señala que con fecha 21 de marzo de 2016 y en visita de verificación de Sentencia, se observa que todas las deficiencias encontradas y evaluadas, se encuentran subsanadas.



B.- Testimonial de la parte reclamada, rendida en audiencia de fecha 01 de marzo de 2017.

1.- **Víctor Manuel Peña Ahumada**, quien declara que los hechos constatados corresponden a infracciones detectadas en la fiscalización y conoce de los mismos como Jefe de la Unidad de Control Ambiental del Departamento de Acción Sanitaria dependiente de la SEREMI de Salud, en la que le compete visar el informe de análisis que posteriormente se deriva al Departamento Jurídico para confección del respectivo expediente que culmina con la sentencia. Ratifica el contenido y su firma en el Informe Técnico Sumario Sanitario. Contrainterrogado sobre los antecedentes y elementos objetivos que tuvo a la vista respecto de los hechos consignados por el fiscalizador, responde que tuvo a la vista el acta de inspección que detalla las infracciones detectadas y plasmadas por los fiscalizadores, quienes están investidos como ministros de fe, mientras que los antecedentes objetivos fueron el set de fotografías acompañadas en los puntos en cuestión y dan cuenta de lo detectado en la visita.

2.- **Susana Elisa Sánchez Valenzuela**, quien declara que todo lo observado en terreno tiene que ver con infracción a la normativa sanitaria que compete a la Autoridad Sanitaria, ya sea manejo de residuos, contaminación a las aguas o emanación de contaminantes al aire; se trata de una inspección visual en terreno de la situación de cada uno de estos parámetros, cómo es el manejo de los distintos tipos de residuos que se generan en el establecimiento, manejo de las aguas y control de emisiones al aire, conociendo de estos hechos como profesional de control ambiental, siendo ingeniero ambiental, con conocimiento de la normativa sanitaria y ambiental, teniendo conocimiento técnico para determinar si existe algún tipo de infracción al manejo de residuos, contaminación a las aguas y emisiones atmosféricas, habiendo asistido a la fiscalización del día 07 de mayo de 2015, firmando el acta como testigo. Contrainterrogada si estaría o no capacitada para determinar el tipo específico de cada una de las infracciones, responde que se realiza una inspección visual y se hace una descripción de la situación en el Acta, vinculando con la normativa que relacionaría al tema, pero el análisis jurídico lo realiza el Departamento Jurídico y no el profesional técnico de la SEREMI; contrainterrogada, responde que no tiene capacitación en materia de olores; contrainterrogada en relación al punto N° 8 del Acta si se hizo una medición objetiva del nivel del Wetland el día 07 de mayo de 2015, responde que fue una inspección visual y tiene respaldo fotográfico de cómo se encontraba el



Wetland, pero no existió medición del límite; contrainterrogada sobre el punto N° 10 del Acta, si se realizó una medición objetiva del nivel de la Laguna anaeróbica, responde que no existió medición del nivel, pero que existen fotografías que dan cuenta de la capacidad en que se encontraba la laguna en esa fecha, que desconoce cuál es el nivel de seguridad de la laguna, pero reitera que se encontraba llena; contrainterrogada al Punto N° 11 del Acta, responde que no se tomó muestra del material flotante en la laguna, pero se indicó que era una observación, además que la laguna contiene los residuos industriales líquidos generados por la empresa, lo que da cuenta que corresponde a materia orgánica; contrainterrogada cómo sabe que el olor proviene de los objetos o material flotante en la superficie de la laguna, responde que el tema de los olores es una percepción del olor, que es característico de materia orgánica en descomposición, que podría ser originado por los que contenía esta laguna; contrainterrogada si el olor podría haber provenido de otra cosa u otra parte, responde que en general, todo el establecimiento de esa empresa tiene un olor característico de materia orgánica, de purines, de tratamiento de residuos líquidos, y eso era lo que se percibía en el ambiente; contrainterrogada sobre el punto N° 11 del Acta, si existe algún registro, medición, fotografía o algún otro elemento objetivo que permita probar el exceso de materia orgánica y lodo sobre la laguna, responde que sólo fotografías.

3.- **María Magdalena Iriondo Salaya**, declara que se constató presencia de olores, malos olores, moscas, generados por mal manejo de los residuos líquidos industriales, también se constató incumplimiento al D.S. 90 y Norma Chilena 1333 de riego, y según los registros que mostró el plantel de sus autocontroles, existieron parámetros que estaban por sobre los límites máximos permitidos en la norma, lo que sabe por haber concurrido como fiscalizadora el día 07 de mayo de 2015, en compañía de la también funcionaria de la SEREMI de Salud, doña Susana Sánchez, por lo que ratifica tanto el contenido como su firma en el Acta de Fiscalización, indicando al contrainterrogatorio la normativa sanitaria infringida y artículo en que se tipifica la infracción para cada punto del acta de fiscalización. Posteriormente, contrainterrogada si cuenta con capacitación en materia de olores, responde que se han hecho reuniones en la SEREMI del Medio Ambiente donde se les ha indicado que se está construyendo la normativa de olores, y dada la experiencia de años fiscalizando este tipo de recintos, se identifica claramente algunas características de los olores e intensidades, uno sabe inmediatamente





si el olor proviene de un lodo, si proviene de un guano, son olores distintos, aguas servidas también son distintos, y eso lo da la experiencia de años, pero no cuenta con capacitación certificada en olores. Contrainterrogada al punto 8, responde que no se hizo medición del nivel del Wetland, pero que a simple vista se observa que las aguas estaban colmatadas y hay fotos que lo indican, pero no recuerda la capacidad que debería tener para su buen funcionamiento, pero insiste que las aguas estaban colmatadas; contrainterrogada al punto 10 del Acta, responde que no se realizó una medición del nivel de la laguna anaeróbica, pero que se observa y sacan fotografías que determinan que estaba colmatada y con peligro de si existe presencia de lluvias, las aguas de la laguna de iban a desbordar, existen fotografías que así lo acreditan; contrainterrogada al Punto 11 del Acta, responde que no se hizo ninguna medición de la materia flotante en la laguna, pero dada su experiencia constató una costra en la superficie de la laguna que era lodo, existiendo registros fotográficos en que se observa lodo flotando en la orilla de la laguna, y que los olores provienen tanto del residuo líquido como de los lodos, porque se constata que en el lugar de la laguna está la emanación de fuertes olores, ya que el sistema de la laguna está muy retirada de los planteles y de cualquier otro foco a los alrededores; contrainterrogada si existe algún registro, medición, fotografía o algún otro elemento objetivo que permita probar el exceso de materia orgánica y lodo sobre la laguna, responde que en fotografía está el registro de exceso de materia orgánica.

**Vigésimo primero:** Que, según consigna la propia sentencia sanitaria, la Autoridad Sanitaria Regional procedería a conocer y resolver únicamente los hechos de carácter sectorial controlados en el acta de inspección, toda vez que el conocimiento y resolución de aspectos contenidos en la Resolución de Calificación Ambiental competen a la Superintendencia del Medio Ambiente. Pues bien, del tenor del ORD. N° 1076 de 2015 del SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O'Higgins, mediante el cual con fecha 19 de mayo de 2015 se informa a la Superintendencia del Medio Ambiente lo observado en Acta de Inspección N° 32.381, es posible establecer que los hechos constatados bajo los numerales 8, 10, 11, 12, 13, 18 y 19 configurarían en concepto de la autoridad sanitaria transgresiones a lo establecido en la RCA N° 23 de 31 de enero de 2006, por lo que necesariamente ha debido abstenerse de conocer de los mismos y sancionarlos, si su intención final era precisamente ponerlos en conocimiento de la autoridad Medio Ambiental, y al no hacerlo, encontrándose en plena tramitación el sumario sanitario – la sentencia recién



se dicta el 03 de diciembre de 2015 y la reposición se falla con fecha 01 de agosto de 2016 -, ha colocado al administrado en la situación de verse expuesto a ser juzgado y eventualmente sancionado por idénticos hechos, vulnerándose con ello el principio de non bis in ídem, aplicable en materia de derecho administrativo sancionatorio.

Por lo demás, es la propia fiscalizadora doña María Magdalena Iriondo Salaya, quien declarando en este juicio precisa que constató los hechos consignados bajo los números 8, 10, 11 y 12 por configurar infracciones a la resolución de calificación ambiental, concordando los tres testigos presentados en estrados por la parte reclamada, que el antecedente objetivo para su establecimiento eran las fotografías que daban cuenta del estado del Wetland y Laguna anaeróbica a la fecha de la fiscalización, de lo que se sigue que estas presuntas infracciones sanitarias habrían de tenerse por acreditadas en el sumario no sólo con el mérito del acta levantada por la fiscalizadora, sino por los testimonios gráficos que se dicen recabados, mismos que no obran en el expediente administrativo. De esta manera, faltando el antecedente objetivo que permitiría dar sustento a las observaciones formuladas en el acta de fiscalización, cabe considerar los hechos consignados en estos cargos como meras apreciaciones subjetivas y no como infracciones debidamente constatadas por parte de la autoridad sanitaria.

Finalmente, ni la sentencia dictada en el sumario sanitario ni la resolución que resuelve la reposición intentada por el sumariado en dicha sede, analiza ni pondera de modo alguno las alegaciones y los medios de prueba aportados en relación a los cargos que se analizan, configurándose también la falta de fundamentación mínima que se ha alegado por la reclamante.

Por las razones dadas, y habiéndose radicado por lo demás la competencia para conocer de estos hechos consignados en los numerales 8, 10, 11, 12, 13, 18 y 19, ante la Superintendencia del Medio Ambiente, no cabe sino absolver a la reclamante de estos cargos formulados en la sede administrativa sanitaria, sin perjuicio de la que eventualmente pudiere establecer la autoridad competente.

**Vigésimo segundo:** Que, en lo que respecta a los hechos consignados en los numerales 1, 2, 9 y 15 del Acta de fiscalización, de su propia redacción se colige que el fundamento mismo de la presunta infracción estaría dado por la emanación o fuga de olores, así por lo demás lo reafirma la fiscalizadora doña María Magdalena Iriondo Salaya, quien coincide con la testigo doña



Susana Elisa Sánchez Valenzuela, en orden a que se trataría de una impresión sensorial, precisando que es la experiencia lo que le permitiría distinguir características de los olores, intensidades y si provienen de lodo, guano o aguas servidas.

En tal sentido, como reconocen ambas testigos y consta en ORD. N° 163 de 2017 del SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O'Higgins, ninguna de las funcionarias que tomó parte de la fiscalización practicada el día 07 de mayo de 2017, cuenta con capacitación en materia de medición de olores, y en todo caso, para que se configure la infracción por la cual se sanciona finalmente a la sumariada, al tenor del artículo 1 del D.S. N° 144/61, es necesario que estas emanaciones "causen peligros, daños o molestias al vecindario", elemento esencial de la falta administrativa imputada que la fiscalizadora no ha dado por constatada en el acta de inspección y que de modo alguno se explica ni aborda en la sentencia dictada por la autoridad sanitaria, para darla por establecida, más allá del denominado Informe Técnico Sumario Sanitario que obra en el expediente administrativo y que suscribe el funcionario don Víctor Manuel Peña Ahumada, mismo en el que éste se limita a señalar que "Generación de olores y moscas es percibido fuertemente por la comunidad", sin explicar la forma a través de la cual arriba a dicha conclusión ni los elementos que consideró para aquello, apareciendo de sus dichos al declarar como testigo que se trató exclusivamente del acta de inspección.

Sobre el mismo punto, cabe señalar que la sumariada trabaja en el tratamiento y disposición de material orgánico, específicamente, purines de cerdos que son criados en los planteles que mantiene, por lo que la natural generación de olores no puede por sí sola suponer la aplicación de una sanción y exige la debida acreditación de que los mismos producen molestias a la población circundante, sea como consecuencia de su mal manejo o su elevada emanación, pero nada de aquello se acreditó en el sumario sanitario y ni aún la sentencia pondera la alegación vertida en orden que los captados no corresponderían a los focos señalados en el acta sino a olores propios de la planta, circunstancia esta última que encuentra sustento en los dichos de la fiscalizadora y testigo doña Susana Elisa Sánchez Valenzuela, quien reconoce que en general, todo el establecimiento de esa empresa tiene un olor característico de materia orgánica, de purines, de tratamiento de residuos líquidos, y eso era lo que se percibía en el ambiente.

Por lo razonado, cabe concluir que los cargos en cuestión se sostienen en la mera apreciación subjetiva de la fiscalizadora y no han podido tenerse



por acreditados con el sólo mérito del acta levantada por esta última, vulnerándose igualmente el principio de fundamentación necesaria, al no hacerse por la autoridad sanitaria análisis alguno sobre las alegaciones vertidas por el sumariado en sus descargos, debiendo en consecuencia absolvérsele de los mismos.

**Vigésimo tercero:** Que, sin perjuicio que lo razonado en torno a la emanación de fuertes olores, resulta igualmente aplicable en ese punto a los hechos consignados bajo los numerales 5 y 6 del acta de fiscalización, en sus descargos la sumariada no ha discutido la segunda parte de la imputación y que se refiere a la presencia de moscas, limitándose a explicar las razones por las cuales los pabellones deben mantenerse abiertos para permitir la ventilación y por las cuales el piso en pabellones de recría es de plástico ranurado, precisando que ha efectuado acción correctiva consistente en el reemplazo de las cortinas de los pabellones de cerdos mejorando las condiciones de hermeticidad, y que de manera consistente ha procurado el control de vectores, acompañando tanto en el sumario como en el marco de este juicio, los certificados emanados de la empresa GLS Sanidad Ambiental.

En este punto, por más que la sentencia sanitaria no se hace cargo de las alegaciones vertidas por la empresa sumariada ni efectúa ponderación alguna de las pruebas allegadas sobre control de vectores y medidas correctivas implementadas, con lo que se incumple el principio de motivación o fundamentación necesaria, lo cierto es que en el marco de este procedimiento la competencia del tribunal sólo permite absolver de los cargos, cuando los hechos que hayan motivado la sanción no se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del Código Sanitario o si tales hechos no constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios, pero de modo alguno declarar la nulidad de derecho público del acto administrativo terminal.

En lo que respecta a la presencia de vectores, específicamente, moscas en los sectores aludidos en los cargos N° 5 y N° 6, habrá de tenerse como reconocido por el sumariado y por ende, debidamente acreditado con el mérito del acta de fiscalización, configurándose así la infracción a la norma contenida en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 594/99 MINSAL que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, debiendo en todo caso considerarse las medidas implementadas por la empresa y que se acreditaron debidamente tanto en el sumario como en el presente juicio con las fotografías y certificados emitidos



por GLS Sanidad Ambiental, así como con el mérito del Acta N° 37259 de 2016 SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O'Higgins, para efectos de atenuar la responsabilidad de la sumariada y hacer efectivo el principio de proporcionalidad de la sanción, aplicable en materia de derecho administrativo sancionatorio.

**Vigésimo cuarto:** Que, en lo concerniente al hecho consignado bajo el numeral 3 del Acta de fiscalización, en sus descargos la sumariada no ha discutido las deficiencias observadas por la fiscalizadora en la caseta donde se ubica el equipo generador eléctrico ni derrame de petróleo, limitándose a señalar que para mejorar aún más la impermeabilización existente, se pintó el radier de concreto con pintura epóxica, se extendió la caseta hacia adelante para mejorar la recepción de tambores de petróleo y otorgar mayor comodidad para mantenciones.

Como se dijera en el motivo anterior, por más que la sentencia sanitaria no se hace cargo de las alegaciones vertidas por la empresa sumariada ni efectúa ponderación alguna de las pruebas allegadas en torno a las medidas correctivas implementadas, con lo que se incumple el principio de motivación o fundamentación necesaria, lo cierto es que en el marco de este procedimiento la competencia del tribunal sólo permite absolver de los cargos, cuando los hechos que hayan motivado la sanción no se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del Código Sanitario o si tales hechos no constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios, no pudiendo extenderse a declarar la nulidad de derecho público del acto administrativo terminal por falta de fundamentación.

En tales condiciones, las deficiencias consignadas en el cargo N° 3, habrá de tenerse como reconocido por el sumariado y por ende, debidamente acreditado con el mérito del acta de fiscalización, configurándose así la infracción a las normas contenidas en los artículos 3, 5 y 36 del Decreto Supremo N° 594/99 MINSAL que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, debiendo en todo caso considerarse las medidas implementadas por la empresa y que se acreditaron debidamente tanto en el sumario como en el presente juicio con las fotografías acompañadas y con el mérito del Acta N° 37259 de 2016 SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O'Higgins, para efectos de atenuar la responsabilidad de la sumariada y hacer efectivo el principio de proporcionalidad de la sanción, aplicable en materia de derecho administrativo sancionatorio.



**Vigésimo quinto:** Que, en relación al cargo contenido en el numeral 4 del Acta de fiscalización, cabe señalar que la sentencia sanitaria no señala norma alguna que se refiera a la obligación de declarar las emisiones del equipo generador de energía o grupo electrógeno existente en la empresa sumariada ni de acreditar aquello mediante registro, como tampoco que se impongan determinadas condiciones de insonorización, y ni aun la fiscalizadora doña María Magdalena Iriondo Salaya fue capaz al declarar como testigo en el presente juicio, de precisar la normativa sanitaria supuestamente infringida en razón de los hechos que consigna en el Acta.

Como bien sostiene el reclamante, la única norma específica sobre el punto aplicable en la región, se encuentra dada por el Decreto 15/2013 Ministerio del Medio Ambiente que Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, que respecto de los grupos electrógenos y en su artículo 27 señala que "Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente", luego, lo que se pide acreditar mediante registro no son las emisiones sino las horas de funcionamiento del equipo generador de energía, por lo que habrá de concluirse que el cargo formulado no constituye efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios, debiendo en consecuencia absolverse del mismo a la reclamante.

**Vigésimo sexto:** Que, en cuanto al hecho consignado bajo el numeral 7 del Acta de fiscalización, tanto en el sumario sanitario como en el presente juicio se acompañó por la ahora reclamante, copia de la Resolución Exenta 2184/2014 SEREMI de Salud Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, que aprueba el Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Particular para SECTOR RECRÍA, ubicado en Parcela 14, Sector Fundo El Molino de la comuna de Mostazal, de propiedad de Sociedad Agrícola El Tranque Ltda., por lo que el cargo en cuestión habrá de tenerse como debidamente desvirtuado y procede que se absuelva del mismo a la reclamante.

**Vigésimo séptimo:** Que, en lo concerniente al hecho consignado bajo el numeral 14 del Acta de fiscalización, en sus descargos la sumariada no ha discutido las deficiencias observadas por la fiscalizadora consistentes en la acumulación de residuos industriales no peligrosos y de no contar para aquello



con la respectiva autorización sanitaria, limitándose a explicar las razones que justificarían la existencia de los residuos que se están acumulando (proceso de reparación y modificación de acuerdo al “Plan de Saneamiento Predial para la Erradicación de PRRS”, aprobado por el SAG Región de O’Higgins mediante Resolución Exenta N° 58/2015), señalando que se efectuó la limpieza, orden y segregación de residuos industriales no peligrosos sector engorda.

Como se dijera en motivos anteriores, por más que la sentencia sanitaria no se hace cargo de las alegaciones vertidas por la empresa sumariada ni efectúa ponderación alguna de las pruebas allegadas en torno a las medidas correctivas implementadas, con lo que se incumple el principio de motivación o fundamentación necesaria, lo cierto es que en el marco de este procedimiento la competencia del tribunal sólo permite absolver de los cargos, cuando los hechos que hayan motivado la sanción no se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del Código Sanitario o si tales hechos no constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios, no pudiendo extenderse a declarar la nulidad de derecho público del acto administrativo terminal por falta de fundamentación.

En tales condiciones, las deficiencias consignadas en el cargo N° 14, habrá de tenerse como reconocido por el sumariado y por ende, debidamente acreditado con el mérito del acta de fiscalización, configurándose así la infracción a las normas contenidas en los artículos 3, 11 y 37 del Decreto Supremo N° 594/99 MINSAL que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, debiendo en todo caso considerarse las medidas implementadas por la empresa y que se acreditaron debidamente tanto en el sumario como en el presente juicio con las fotografías acompañadas y con el mérito del Acta N° 37259 de 2016 SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O’Higgins, para efectos de atenuar la responsabilidad de la sumariada y hacer efectivo el principio de proporcionalidad de la sanción, aplicable en materia de derecho administrativo sancionatorio.

**Vigésimo octavo:** Que, en cuanto al hecho consignado bajo el numeral 16 del Acta de fiscalización, si bien la empresa acreditó en el sumario sanitario que presentó y le fue aprobado por Resolución Exenta N° 58/2015 SAG Región de O’Higgins, el “Plan de Saneamiento Predial para la Erradicación de PRRS”, lo cierto es que dicho instrumento no contiene instrucción alguna en torno a la conservación de cerdos muertos hasta entrar en proceso de descomposición y así evitar la diseminación del virus de PRRS, ni menos que se le haya



autorizado para mantenerlos en bins de acopio, como observó y plasmó la fiscalizadora en el acta levantada durante la inspección. Sin perjuicio de aquello, la sumariada procedió como medida correctiva a adquirir un contenedor refrigerado para acumulación de mortecinos por valor de \$5.450.000.-, acompañando factura en los descargos y prueba documental fotográfica.

Como se dijera en motivos anteriores, por más que la sentencia sanitaria no se hace cargo de las alegaciones vertidas por la empresa sumariada ni efectúa ponderación alguna de las pruebas allegadas en torno a la medida correctiva implementada, con lo que se incumple el principio de motivación o fundamentación necesaria, lo cierto es que en el marco de este procedimiento la competencia del tribunal sólo permite absolver de los cargos, cuando los hechos que hayan motivado la sanción no se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del Código Sanitario o si tales hechos no constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios, no pudiendo extenderse a declarar la nulidad de derecho público del acto administrativo terminal por falta de fundamentación.

En tales condiciones, las deficiencias consignadas en el cargo N° 16, habrá de tenerse como reconocido por el sumariado y por ende, debidamente acreditado con el mérito del acta de fiscalización, configurándose así la infracción a las normas contenidas en los artículos 3, 11 y 37 del Decreto Supremo N° 594/99 MINSAL que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, debiendo en todo caso considerarse la medida implementada por la empresa y que se acreditara debidamente tanto en el sumario como en el presente juicio con las fotografías acompañadas y con el mérito del Acta N° 37259 de 2016 SEREMI de Salud Región del Libertador Bernardo O'Higgins, para efectos de atenuar la responsabilidad de la sumariada y hacer efectivo el principio de proporcionalidad de la sanción, aplicable en materia de derecho administrativo sancionatorio.

**Vigésimo noveno:** Que, en relación al hecho consignado bajo el numeral 17 del Acta de fiscalización, y conforme a lo explicado en la audiencia testimonial por la fiscalizadora doña María Magdalena Iriondo Salaya, durante la inspección constató la presencia de residuos con logo que indica peligrosidad del producto, los que de conformidad al D.S. 148 que debe ser desnaturalizado a través de un sistema triple lavado y depositado en una bodega de residuos peligrosos para ser luego enviado a un sitio autorizado de





disposición final. Lo anterior se encuentra expresamente regulado para los envases de plaguicidas, en el artículo 24 del Decreto Supremo N° 148/2004 MINSAL que Aprueba Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Sobre este punto, sin perjuicio de las alegaciones vertidas por la sumariada en sus descargos y de la prueba acompañada para efectos de acreditar el adecuado manejo y disposición de residuos peligrosos (Guía de Despacho N° 27281), lo cierto es que ni la sentencia sanitaria ni la resolución que se pronuncia sobre la reposición en sede administrativa, da por configurada y sanciona a la empresa por infringir lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Supremo N° 148/2004, y no pudiendo modificarse lo resuelto en perjuicio de la reclamante, no queda más que absolverla de este último cargo.

**Trigésimo:** Que, conforme a lo razonado, la responsabilidad infraccional sanitaria de la reclamante queda reducida únicamente a los cargos recogidos bajo los numerales 3, 5, 6, 14 y 16, la que se ha visto atenuada con ocasión de las medidas correctivas que dispuso para subsanar las observaciones contenidas en dichos puntos por el Acta de fiscalización, y a fin de que la sanción que procede aplicar se ajuste al principio de proporcionalidad, estimándose que las infracciones que se mantienen corresponden a las de menor entidad en el marco del sumario sanitario instruido, la multa originalmente impuesta será rebajada prudencialmente en un 90% y quedará fijada en una suma equivalente a 20 Unidades Tributarias Mensuales.

**Por estas consideraciones y visto, además,** lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República; artículos 1, 10, 11, 17, 18, 25, 41, 45, 46 y 47 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos; artículos 3, 67, 82, 89, 161, 163, 166, 167, 171 y 174 del Código Sanitario; artículo 1° del Decreto Supremo N° 144/61 MINSAL sobre Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquiera naturaleza; artículos 3, 5, 11, 18, 36 y 37 del Decreto Supremo de Salud 549/99 sobre Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo; artículos 1698, 1699, 1700 y 1702 del Código Civil; 144, 160, 169, 170, 342, 358, 384, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

**I.-** Que, **se acogen las tachas** formuladas por la parte reclamada en la audiencia de 02 de marzo de 2017, en contra de los testigos Jean Paul Labadie Fuchs y Braulio Antonio Cádiz Ríos, sin costas, por estimarse que la vencida ha tenido motivos plausibles para litigar en la incidencia.



**II.-** Que, **se rechaza la excepción de caducidad** de la acción re reclamación de multa sanitaria, formulada por la reclamada en lo principal y reiterada como excepción de fondo en el primer otrosí de su minuta escrita de fecha 06 de diciembre de 2016, sin costas, por no haberse solicitado.

**III.-** Que, **se acoge parcialmente la demanda de reclamación de multa sanitaria** deducida con fecha 14 de octubre de 2016 por el abogado don Francisco de la Vega Giglio, en representación de la Sociedad Agrícola El Tranque de Angostura Limitada, misma que se dirigiera en contra de la sentencia sanitaria Resolución Exenta N° 17816/2015 y sentencia recaída en reposición administrativa Resolución Exenta N° 7686/2016, dictadas por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en el sentido de que:

- a) Se absuelve a la sumariada y ahora reclamante de los cargos formulados en el Acta de fiscalización bajo los numerales 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19, en los términos y por razones dadas en esta sentencia.
- b) Se mantiene la sanción de multa impuesta a la sumaria y ahora reclamante, únicamente por los hechos consignados en los numerales 3, 5, 6, 14 y 16 del Acta de fiscalización.
- c) Se rebaja prudencialmente la multa original de 200 UTM que se impusiera a la sumariada, en un 90%, quedando fijada en la suma equivalente a 20 Unidades Tributarias Mensuales, la que deberá cancelarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia.

**IV.-** Que, no se condena en costas a la parte reclamada, por no haber resultado completamente vencida.

**Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.**

**Rol N° C-20566-2016.**

**Dictada por don Manuel Jesús Figueroa Salas, Juez Titular.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Rancagua, diecisiete de Agosto de dos mil diecisiete**

